



Magistrado Ponente: Dr. Jorge Dussán Hitscherich

RESOLUCIÓN No. CSJHUR19-352
6 de noviembre de 2019

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11- 8716 de 2011 y según lo aprobado en sesión ordinaria del 30 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO

1. Antecedentes.
 - 1.1. La abogada Carmen Patricia Tejada Vega, solicitó vigilancia judicial administrativa al proceso ordinario laboral con radicación No. 2015-0198, el cual cursa en el Tribunal Superior Sala civil Familia Laboral de Neiva, siendo Magistrada Ponente la doctora Luz Dary Ortega Ortíz, debido a que desde el 29 de julio de 2016 se encuentra el expediente al despacho, sin que a la fecha se haya desatado el recurso de alzada.
 - 1.2. En virtud al artículo 5º del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, con auto del 15 de octubre de 2019, se dispuso requerir a la doctora Luz Dary Ortega Ortíz, Magistrada del Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de Neiva, para que rindiera las explicaciones del caso.
 - 1.3. La doctora Luz Dary Ortega Ortíz, dentro del término dio respuesta al requerimiento, señalando que:
 - 1.3.1. El proceso objeto de la vigilancia fue repartido a ese despacho el 15 de junio de 2017, admitido por el magistrado del momento, con auto del 27 de junio de 2017 y, desde esa fecha conserva el turno 33, según el orden de llegada, tal como se puede observar en el listado de estadística interna del despacho, el cual anexó.
 - 1.3.2. Aclaró que el expediente se encuentra en el despacho desde el mes de junio de 2017, para resolver el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.
 - 1.3.3. Indicó que, el 4 de junio de 2019 ella asumió la titularidad de ese despacho, estando vacante desde el 1 de abril de 2019, por lo que recibió un total de 259 procesos laborales, 69 procesos civiles y 23 de familia.
 - 1.3.4. Agregó que, desde su posesión como magistrada de ese despacho, ha sido fiel a las disposiciones del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, así que, los procesos se han resuelto conforme a la fecha de ingreso al despacho.
 - 1.3.5. Resaltó que en virtud al Acuerdo 001 de 2019, la Sala Civil Familia Laboral de esa Corporación, dispuso otorgar prelación respecto de los procesos donde se discuten derechos derivados del Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones, por lo que se ha dado trámite a los estos procesos en turno de llegada y a aquellos que tienen que ver con asuntos pensionales.
 - 1.3.6. Manifestó que, por haber estado el despacho vacante por un tiempo de dos meses, esa dependencia está compensando aquellas acciones que no se recibieron, por lo que, desde

junio a septiembre de 2019, ingresaron 16 tutelas de primera instancia y 52 de segunda instancia, situación que empeoró el retraso que de antaño trae el despacho.

2. Marco Jurídico de la Vigilancia Judicial.

Con fundamento en los hechos expuestos y las explicaciones dadas por la funcionaria, corresponde a esta Corporación entrar a decidir si la servidora judicial ha incurrido en actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de Justicia, a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para lo cual es pertinente señalar lo siguiente:

- 2.1. La Vigilancia Judicial Administrativa fue establecida por la Ley 270 de 1996 y reglamentada por la Sala Administrativa del Consejo Superior mediante Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, normas que la definen como una herramienta que sirve para verificar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, como también para procurar por el normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial¹.
- 2.2. En el mismo sentido, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53 de 2010, señaló que la Vigilancia Judicial Administrativa es una acción de carácter eminentemente administrativo que busca que la administración de Justicia sea eficaz y oportuna bajo el respeto de la autonomía e independencia judicial (Artículo 230 de la C.P. y 5º de la Ley 270 de 1996).
- 2.3. Según lo dispuesto por el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, la Vigilancia Judicial Administrativa opera cuando un funcionario judicial incurre en prácticas dilatorias o mora judicial injustificada, que atente contra la eficaz y oportuna administración de justicia, situación ésta que conllevaría a la aplicación de una sanción de tipo administrativo.
- 2.4. La mora judicial es definida como "*la conducta dilatoria del Juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable*"².
- 2.5. Es claro que el ámbito de aplicación de la vigilancia judicial administrativa apunta exclusivamente a que se adelante un control y verificación de términos en el desarrollo de las etapas procesales, en procura de una administración de justicia eficaz y oportuna, para advertir dilaciones injustificadas imputables, bien sea al funcionario o al empleado del despacho donde cursa el proceso.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar si la doctora Luz Dary Ortega Ortíz, Magistrada del Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de Neiva, ha incurrido en mora o retardo injustificado para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de junio de 2017, dentro del proceso ordinario laboral con radicación No. 2015-0198.

4. Precedente normativo y jurisprudencial: acceso a la administración de justicia y la mora judicial.

Los artículos 29 y 228 de la Carta Política y el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), imponen a los servidores judiciales, la obligación de atender los términos procesales. Por su parte, los numerales 1 y 8 del artículo 42 del Código General del Proceso, establecen que es deber del juez velar por la pronta solución del proceso, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización, procurar la mayor economía procesal y dictar las providencias dentro de los términos legales.

¹ Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, artículo 1º.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de abril de 2008. Consejero Ponente: Dr. Héctor J. Romero Díaz. Rad.: 11001-03-15-000-2008-00324-00

Sobre el alcance de estas disposiciones, la Corte Constitucional señaló:

“La jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos. Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”³.

Asimismo, la Corte Constitucional ha expresado que a los funcionarios no les basta con aducir exceso de trabajo o una significativa acumulación de procesos para que el incumplimiento de los términos judiciales sea justificado, pues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicción la ineficiencia o ineficacia del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales⁴.

De igual manera, es pertinente reiterar lo señalado por la jurisprudencia en cuanto que la justificación de la mora debe ser extraordinaria y no puede simplemente argumentarse la congestión de los asuntos al despacho, pues es necesario que *“el juez correspondiente ha obrado con diligencia y cumplido a cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y legales, de modo tal que la demora en decidir sea para él el resultado de un estado de cosas singularizado y probado que se constituya en motivo insuperable de abstención”⁵* o, como se afirmó en la Sentencia T-1068 de 2004, *“no puede aducirse por parte de un juez de la República que se cumplen las funciones a él encargadas para un negocio y se desatienden en otro”⁶*.

Complementando esta posición, la misma Corporación señaló lo siguiente:

“Se está ante un caso de dilación injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. La dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar”⁷.

Vale la pena agregar que en la Sentencia T-292 de 1999, la Corte Constitucional llega a sostener que el análisis de cada situación debe hacerse en “un sentido exigente”, de manera que solo si se encuentra “probada y establecida fuera de toda duda” la justificación de la conducta, puede exonerarse al servidor judicial de su obligación de resolver oportuna y eficazmente los asuntos a su cargo. En efecto, la providencia comentada sostiene lo siguiente:

“Las situaciones, para que configuren justificación en cuanto a la mora del juez, deben ser examinadas en cada caso específico con el carácter extraordinario que les corresponde, tanto por el juez de tutela como por el disciplinario, con un sentido exigente y sin laxitud, con el fin de impedir que la extensión de las razones justificativas convierta en teórica la obligación judicial de resolver con prontitud y eficacia. Solamente una justificación debidamente probada y establecida fuera de toda duda permite exonerar al juez de su obligación constitucional de dictar oportunamente las providencias a su cargo, en especial cuando de la sentencia se trata.

³ Sentencia T-577 de 1998.

⁴ Sentencia T-604 de 1995.

⁵ Sentencia T-292 de 1999.

⁶ Citada en la Sentencia T-030 de 2005.

⁷ Sentencia SU394 de 2016. Además, pueden consultarse las siguientes Sentencias: T-502 de 1997, T-292 de 1999, T-1226 de 2001, T-803 de 2012 y T-230 de 2013.

La justificación es extraordinaria y no puede provenir apenas del argumento relacionado con la congestión de los asuntos al despacho”.

Como complemento de lo anterior, la Corte Constitucional también ha precisado que es al funcionario a quien le corresponde demostrar que obró con diligencia, como se afirma en la siguiente providencia:

“[...] la mora judicial solo se justificaría al magistrado, juez o fiscal si a pesar de que éstos agotaron todas las medidas para evitar la congestión del despacho judicial, aun así la dilación surge de forma imprevisible e ineludible. Debiéndose en todo caso informarse de esa situación a los administrados quienes tienen derecho a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos. Lo contrario sería asumir como constitucionalmente válido que el administrado deba ser sometido a una espera indefinida en la resolución de su demanda de justicia, situación que repugna al Estado social de derecho dada la garantía material y no meramente formal de los derechos que en él se prohija.

La Sala precisa, entonces, que el hecho de que la dilación en el trámite judicial no sea imputable a conducta dolosa o gravemente culposa alguna del funcionario, sino al exceso de trabajo que pesa sobre los despachos judiciales, puede, en principio, exculpar a aquellos de su responsabilidad personal, pero no priva a los administrados del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni permite considerarlos inexistentes. En otras palabras, dicha situación, no autoriza a considerar que la dilación es justificada, sin prueba alguna de que se haya intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para evitarla. De esta manera el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial”⁸.

En este sentido, si se presenta mora judicial en un proceso, debe demostrarse que se presentaron circunstancias insuperables, no atribuibles al funcionario, como ocurre cuando se interponen recursos ante el superior, se presentan incidentes o en aquellos casos en que debe interrumpirse o suspenderse el trámite del proceso.

También es posible admitir un retardo normal en las decisiones que deben adoptarse cuando el funcionario demuestre que ha actuado de manera diligente, adelantando las actuaciones procesales en plazos razonables, atendiendo a la carga laboral de su despacho y a la complejidad del asunto que conoce.

5. Análisis del caso concreto.

La presente vigilancia judicial administrativa inició con el informe presentado por la abogada Carmen Patricia Tejada Vega, indicando que la doctora Luz Dary Ortega Ortíz, Magistrada Ponente del Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de Neiva, no ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, dentro del proceso ordinario laboral con radicado No. 2015-0198.

Pues bien, revisadas las actuaciones surtidas en el proceso vigilado se encontró, que:

Fecha	Actuación
15/06/2017	Correspondió por reparto la apelación de sentencia del 5 de junio de 2017, proferida por el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva.
16/06/2017	El Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva, remite memorial poder de las demandadas.
27/06/2017	Auto admite recurso de apelación.
05/07/2017	Expediente ingresa al despacho.

⁸ Sentencia T-030 de 2005.

08/03/2019	Constancia secretarial, registra que en la fecha se recibe expediente del Juzgado 002 Laboral del Circuito de Neiva, el cual había sido enviado en calidad de préstamo por el despacho del Magistrado. Pasa al despacho.
------------	--

Del anterior recuento procesal, se observa que el proceso vigilado ingresó al despacho desde el 5 de julio de 2017 para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, correspondiéndole el turno 33.

Sin embargo, aunque se ha presentado mora o retardo para desatar el recurso de apelación, la misma se encuentra justificada y es producto de circunstancias que conllevaron a un represamiento de los asuntos por atender, ajenos a la voluntad de la actual funcionaria, tales como, la ausencia del titular del despacho, situación que se prolongó por dos meses, pues sólo hasta el 4 de junio de 2019 se nombró a la doctora Luz Dary Ortega Ortiz, como magistrada de esa dependencia.

Ahora bien, pese a que, el proceso objeto de esta vigilancia tiene un turno asignado para su resolución, el cual no ha sido posible evacuar, obedece a que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior, mediante el Acuerdo 001 del 6 de junio de 2019, estableció un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia que decidan recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, para aquellos casos relacionados con el tema de pensiones.

Es por ello que esa medida, aunque pretende la agilización y descongestión de todos los despachos que integran la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior, en aras de ofrecer una respuesta eficaz a la demanda del servicio de justicia en segunda instancia, incide indirectamente en la resolución de los demás asuntos, pues éstos son evacuados gradualmente, dando prelación a aquellas controversias, cuya pretensión es el reconocimiento de un derecho pensional.

Aunado a ello, es dable precisar que la resolución de los asuntos a cargo del operador judicial, debe atenderse bajo la observancia del turno de los procesos que con anterioridad se encontraban al despacho y de los casos especiales a los cuales debe dar prioridad por mandato legal, pues de otra manera, se desconocería el derecho a la igualdad y al debido proceso de las demás personas que también se encuentran esperando las decisiones en su caso en particular.

De acuerdo con lo anterior, no puede considerarse que el retardo o mora para desatar el recurso de alzada en cuestión, corresponde a una conducta omisiva o negligente atribuible a la funcionaria, pues como se dijo en precedencia, la no resolución del asunto, obedece a razones objetivas y razonables, producto de la congestión judicial que enfrenta esa Corporación, debido a su naturaleza promiscua, obligada a conocer de asuntos civiles, de familia y laborales de este Distrito Judicial.

Bajo este entendido, es de precisar que el objetivo de la vigilancia judicial apunta a que se adelante un control de términos, como también, procurar por el normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, respetando la autonomía e independencia judicial de los operadores de la justicia, por lo que esta Corporación no encuentra mérito para abrir el mecanismo de la vigilancia judicial a la doctora Luz Dary Ortega Ortiz, ya que está demostrado la concurrencia de circunstancias ajenas a su voluntad, que le ha imposibilitado resolver el asunto objeto de esta investigación administrativa.

6. Conclusión.

Analizadas en detalle las situaciones fácticas puestas de presente en los numerales anteriores, este Consejo Seccional no encuentra mérito para abrir el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en contra de la doctora Luz Dary Ortega Ortiz, en su condición de Magistrada del Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de Neiva, por no reunirse los presupuestos señalados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para tal fin.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ABSTENERSE de abrir el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en contra la doctora Luz Dary Ortega Ortíz, Magistrada del Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de Neiva, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la abogada Carmen Patricia Tejada Vega en su condición de solicitante, y a la doctora Luz Dary Ortega Ortíz, Magistrada del Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral de Neiva, como lo disponen los artículos 66 a 69 CPACA, líbrense las comunicaciones del caso.

ARTÍCULO 3. Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, por ser éste trámite de única instancia a la luz de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el cual de conformidad al artículo 74 del CPACA deberá interponerse ante esta Corporación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 ibídem.

ARTÍCULO 4. Una vez se adelante el trámite correspondiente y en firme el presente acto administrativo, las diligencias pasaran al archivo definitivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Neiva, Huila.



JORGE DUSSÁN HITSCHERICH

Presidente
JDH/DADP.